RECOMENDACIÓN N° 19/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 12 de junio de 1997, una queja presentada por el señor Gustavo Alonso Quiroz, en la que expresó presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de él y del señor René Raúl López Sánchez, atribuibles a Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó el quejoso, que el 20 de abril de 1997, fueron agredidos físicamente y robados por un grupo aproximadamente de 12 personas que viajaban a bordo de una camioneta blanca, Marca Chrysler, tipo Voyager, con placas de circulación 689-HLH del Distrito Federal.

En la misma fecha, los señores Gustavo Alonso Quiroz y René Raúl López Sánchez, denunciaron ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Coacalco, México, los hechos motivo de la queja, dándose inicio a la averiguación previa COA/I/1129/97, por el delito de lesiones en agravio de los quejosos y en contra de quien resultara responsable.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó al Procurador General de Justicia del Estado de México, diversos informes acerca de la integración del acta de averiguación previa, iniciada con motivo de los hechos referidos en la queja.

En investigación de los hechos, la Representación Social, a partir del 23 de abril de 1997, y a través de diversos informes rendidos por la Policía Judicial, tuvo conocimiento de que el vehículo relacionado con los hechos denunciados, se encontraba en el interior de la casa ubicada en calle Tilos No. 123, Colonia Villa de las Flores, Coacalco, México, al parecer domicilio propiedad de uno de los probables responsables.

En cuanto a la identificación y localización de uno de los probables responsables, propietario del vehículo relacionado con los hechos, los primeros elementos policíacos comisionados, señalaron que se trataba del señor Francisco Javier

* La Recomendación 19/98 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 21 de abril de 1998, por dilación en la procuración de justicia respecto de la integración de la averiguación previa COA/I/1129/97; en agravio de los señores Gustavo Alonso Quiroz y René Raúl López Sánchez. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y 10 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la Recomendación 19/98 consta de 22 hojas.

Pineda, posteriormente, otro policía judicial afirmó que se trataba de Francisco Javier García Mandujano, finalmente un nuevo grupo de elementos comisionados logró esclarecer que el nombre correcto era Francisco Javier Pineda Altamira; y que se desempeña como Comandante de la Policía Judicial Federal.

En fechas 6 de agosto de 1997 y 9 de enero de 1998, el Representante Social, por conducto de diversas dependencias de la Procuraduría General de la República, solicitó la comparecencia del señor Francisco Javier Pineda Altamira, en calidad de probable responsable, no habiendo obtenido respuesta favorable, encontrándose actualmente la averiguación previa en trámite, en espera de que el citado sea presentado ante esa Representación Social, resultando que la última actuación realizada por el Agente del Ministerio Público del conocimiento, fue la de fecha 9 de enero de 1998, en la que se giró un oficio al Director de la Policía Judicial Federal.

El estudio lógico jurídico de las constancias que integran el expediente de queja CODHEM 1879/97-2, permite afirmar fundadamente que se acreditó violación a derechos humanos de los señores Gustavo Alonso Quiroz y René Raúl López Sánchez, atribuibles al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Coacalco, México, así como de los elementos de la policía judicial comisionados para dar cumplimiento a la orden de presentación del probable responsable Francisco Javier Pineda Altamira, en atención a las siguientes observaciones:

La dilación observada en la integración y determinación de la averiguación previa COA/I/1129/97, atribuible a los servidores públicos precitados, contraviene lo preceptuado en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conculcando la Garantía de Seguridad Jurídica, toda vez que como se puede advertir de las constancias enviadas a este Organismo, el Representante Social, desde el inicio de la indagatoria, en el mes de abril de 1997 hasta el mismo mes de 1998, es decir durante doce meses, únicamente ordenó la comparecencia de los ofendidos en el mes de noviembre de 1997, y giró cinco oficios recordatorios a la Policía Judicial a efecto de que presentara a uno de los probables responsables, así como dos más a la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, debe indicarse que respecto del delito de robo denunciado en la misma fecha por el señor Gustavo Alonso Quiroz, el Representante Social, hasta el momento de emitir la Recomendación, había prescindido de realizar las diligencias básicas para su debida integración, infringiendo lo dispuesto por los artículos 5, 81 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México y 17 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La conducta omisa de los elementos de la Policía Judicial por la evidente dilación en la presentación del señor Francisco Javier Pineda Altamira; a doce meses de que la orden ministerial les fue girada por el Representante Social sin que a la fecha se le haya dado cumplimiento, transgrede lo dispuesto en los artículos 22 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y 4 fracciones I y VIII del Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que la queja fue propuesta para ser solucionada a través de la vía conciliatoria, específicamente en que el acta de averiguación previa fuera integrada y determinada conforme a derecho a la brevedad posible, procedimiento que fue aceptado por la Procuraduría General de Justicia de esta entidad federativa, habiendo fenecido el tiempo otorgado para tal efecto, sin que la autoridad señalada como responsable diera cumplimiento a la propuesta referida.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la Recomendación, el Agente del Ministerio Público y los elementos de la Policía Judicial comisionados para dar cumplimiento a la orden de presentación del señor Francisco Javier Pineda Altamira; dentro de la indagatoria en mérito, en ejercicio de sus atribuciones, desacataron el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, respetuosamente, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen todas y cada una de las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el acta de averiguación previa COA/I/1129/97, a fin de que a la brevedad posible se determine la misma con estricto apego a derecho.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad del Lic. Alejandro R. Pacheco Ojeda, Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Coacalco, México, por las omisiones

que quedaron precisadas en el inciso *a* del capítulo de Observaciones de la Recomendación, y de ser procedente, imponer la sanción en términos de ley.

TERCERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de determinar la responsabilidad por la dilación señalada en el inciso *b* del capítulo de Observaciones de la Recomendación, atribuible a los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de resultar procedente, imponer las sanciones en términos de ley.